



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA:	PROCESO ORDINARIO LABORAL
ASUNTO:	APELACIÓN DE AUTO PROFERIDO EN AUDIENCIA DEL 8 DE OCTUBRE DE 2020
DEMANDANTE:	MARTÍN ALONSO RUIZ TABORDA
DEMANDADO:	PROTECCIÓN S.A., JUNTA REGIONAL Y NACIONAL DE INVALIDEZ
LLAMADO EN GARANTÍA:	COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
RADICADO:	050013105 010 2014 01674 00
ACTA No	43

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por **MARTÍN ALONSO RUIZ TABORDA** en contra de **PROTECCIÓN S.A y otros** para decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante frente al auto proferido por el Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín mediante el cual no accedió a la prueba pericial solicitada.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 43** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

En este proceso en el que la parte demandante pretende se condene al reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común¹, se allegaron con la demanda tres dictámenes, dos realizado en el año 2009 y uno en el 2014²; y se

¹ Folio 2

² JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ del **03 de febrero de 2009** (FOLIO 16 a 18), JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ del **21 de octubre de 2009** (FOLIO 19 a

RADICADO 050013105 010 2014 01674 00

solicitó además como prueba que se nombrara como perito a la IPS de la Universidad de Antioquia.

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ (FOLIO 16 a 18) 03 de febrero de 2009	JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ (FOLIO 19 a 22) 21 de octubre de 2009	IPS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (Folio 25 – 28) 8 de mayo de 2014
ORIGEN: COMUN	ORIGEN: COMUN	ORIGEN: COMUN
PCL: 43.35%	PCL: 45.55%	PCL: 51.1%
FE = 12 de agosto de 2004	FE = 12 de agosto de 2004	FE = 12 de agosto de 2004
Fibromialgia, Trastorno depresivo clase III, restricción AMA rodilla	Fibromialgia, Trastorno depresivo recurrente no especificado	Episodios Depresivos Trastorno de dolor persistente - Fibromialgia

De otro lado, PROTECCION y la llamada en garantía **Compañía de Seguros Bolívar S.A** allegaron otros dictámenes realizados al actor en los **años 2004 y 2006**³.

En audiencia celebrada el **12 de abril de 2016** el Juez de instancia no accedió a la solicitud de SEGUROS BOLIVAR de vincular al proceso a la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ ni decretó la prueba solicitada en la demanda dirigida a que se nombrara a la IPS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA como perito, ni a la solicitada por SEGUROS BOLIVAR. En su lugar, decretó como **prueba de oficio** la realización de un dictamen pericial por la **JUNTA REGIONAL DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA**, pero por una sala diferente a la conformada el 3 de febrero de 2009, fecha de emisión del dictamen obrante a folios 16 – 18. Ordenó a la parte actora que aportara al expediente las historias clínicas y documentos necesarios para la práctica del experticio⁴.

En efecto, la Junta regional actuando como perito emitió un dictamen realizado el **15 de junio de 2016** que fue puesto en traslado de las partes el **6 de julio de 2016**⁵ en el que se definió una **PCL del 41.40%** con **F de E 12 de agosto de 2004**, por enfermedad de origen común (**Fibromialgia y trastorno de ansiedad**). Fue así como

22) y de la IPS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA del 8 de mayo de 2014, que fue contratado de forma particular (Folio 25 – 28)

³ JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ del **30 de noviembre de 2004 (PCL 36.71% - F de E 12 de agosto de 2004)** (Folio 145 – 146) y JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ del **7 de febrero de 2006**

⁴ Folio 190 – CD 189

⁵ Folio 341 – 343

se profirió sentencia absolutoria el **15 de febrero de 2017**⁶, providencia que fue anulada por esta Sala de Decisión el **10 de julio de 2018** para ordenar Integrar el contradictorio con la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ como LITIS CONSORTE NECESARIOS por pasiva⁷. Estas entidades intervinieron oportunamente: i) La JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ contestó oponiéndose a las pretensiones⁸ y la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ también se opuso a través de curador *ad litem*⁹.

Ahora bien, estando dentro del término de traslado de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, el apoderado del demandante reformó la demanda solicitando el decreto de nueva prueba pericial, insistiendo en que las calificaciones obrantes en el expediente no se compadecen con su estado de salud, solicitando que el señor RUIZ TABORDA sea remitido a la **FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**¹⁰. Con providencia del 14 de febrero de 2019 el juez decidió admitir la reforma de la demanda pero la llamada en garantía se opuso al decreto de la nueva valoración deprecada, señalando lo siguiente: i) Que “el dictamen de la Universidad de Antioquia” ya fue plenamente debatido dentro del proceso, tanto es así que se practicó nuevo dictamen pericial decretado en el transcurso del debate probatorio emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez . ii) Si lo que se pretende es una nueva calificación, el demandante debe iniciar un nuevo trámite administrativo de recalificación y no intentar por esta vía desplazar el debate en torno a un nuevo dictamen. iii) Señala que lo demandado se encuentra encaminado a debatir su estado de salud a la fecha de emisión de los dictámenes primigenios , que llevaron a la negativa inicial de su pensión¹¹.

⁶ Folio 347 y CD 349

⁷ Auto del 4 de julio de 2018 programó la audiencia, página 560. Acta obrante a página 563 del expediente.

⁸ Página 591 a 593.

⁹ Página 620 a 622. (Folio 402 – 404) Con auto del 8 de abril de 2019 se dio por contestada la demanda, página 523.

¹⁰ Página 611 (Folio 394). Memorial del **28 de enero de 2019**

¹¹ Página 613 (Folio 396). Memorial del 26 de febrero de 2019.

Fue así como, mediante auto del **26 de febrero de 2019**¹² el A quo consideró que no era procedente acceder a la solicitud realizada por el actor de ser remitido a la **FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**, señalando que al haberse declarado la nulidad para integrar el litisconsorcio por pasiva, lo procedente era realizar la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo, oportunidad en la que resolvería lo relativo a decretar o no la prueba pericial solicitada por la parte actora.

El **8 de octubre de 2020** se llevó a cabo la audiencia¹³ y para lo que es objeto de análisis por la Sala en esta oportunidad, concretamente en relación con el decreto de pruebas, el Despacho convalidó las practicadas en audiencia del **15 de febrero de 2017**; mantuvo la documental inicialmente aportada porque las juntas no presentaron nuevas. Finalmente, no accedió a la prueba pericial solicitada por el demandante argumentando que el actor ya había sido remitido a la Junta Regional de Calificación de Antioquia para valoración de su pérdida de capacidad laboral en porcentaje, Fecha de estructuración y origen de la contingencia, dictamen que se puso en traslado sin que se presentara controversia, invocando así los artículos 228 y siguientes del CGP.

Inconforme con esta decisión de negar el decreto de nueva prueba pericial, el apoderado del demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Argumentó para ello: i) Que la prueba fue pedida en la demanda oportunamente. ii) Dado que el objeto del litigio recae sobre la condición de invalidez del demandante, las calificaciones allegadas al proceso son un poco antiguas y el dictamen realizado en el proceso data del 2016, actualmente no hay pruebas que den cuenta del estado de salud del demandante que es cambiante; iii) En este orden de ideas, no tendría sentido que el actor siendo inválido en este momento por el empeoramiento de su salud en los últimos años, se niegue la pensión por pruebas practicadas hace más de una década, iv) También argumenta a favor de la práctica de un nuevo dictamen la economía y el hecho de que las calificaciones son revisables cada dos años.

¹² Página 614 a 615. En esta oportunidad también se emplazó a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y se nombró curadora ad litem a la abogada Kelly Yuliet Rojas Restrepo, misma que dio contestación a la demanda el 6 de abril de 2019.

¹³ Página 643.

Para mantenerse en su decisión, el A quo señaló: i) El Tribunal Superior de Medellín declaró la nulidad de la sentencia por falta de integración del litisconsorcio por pasiva de las Juntas de Calificación, manteniendo la validez de los medios de prueba que habían sido acopiados en el proceso. ii) El proceso lleva más de 6 años y no es dable revisar los dictámenes cada 2 años perpetuando el proceso, adicionalmente, la prueba ya fue ordenada, se sujetó a las condiciones de la ley, sería improcedente hacer otra nueva prueba pericial porque tocaría integrar a la U de A para que sustente el dictamen y se terminaría decidiendo un asunto de legalidad de las pruebas realizadas.

2. TRÁMITE EN ESTA INSTANCIA – COMPETENCIA - PROBLEMAS JURÍDICOS

El **14 de abril de 2021** se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante otorgándose un término de 5 días hábiles para la presentación de alegatos de conclusión¹⁴ pero las partes se abstuvieron de intervenir¹⁵.

Pues bien, la competencia de la Sala está dada en virtud de las materias del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y para definir el problema jurídico, debe partirse de lo siguiente: **i)** Al proceso han sido vinculadas las Juntas Regional y Nacional de calificación de invalidez porque se pretende cuestionar la decisión por ellas adoptada, en virtud de la competencia atribuida por el ordenamiento para dirimir las controversias que se suscitan entre los afiliados y las entidades de seguridad social; lo anterior, con el fin de definir si resulta o no procedente el reconocimiento de una pensión de invalidez al actor. **ii)** Se decretó una prueba pericial de oficio practicada en el año 2016 con el fin de determinar la pérdida de capacidad laboral del actor. **iii)** Así el problema jurídico se contrae en determinar si a pesar de haberse practicado tal experticio decretado en virtud de las facultades oficiosas del Juez, resulta procedente ordenar uno nuevo dado que, han pasado más de cinco años desde el momento de su realización.

3. CONSIDERACIONES

Pues bien, se ha indicado en los antecedentes de esta providencia, que en este proceso lo que pretende el señor MARTÍN ALONSO RUIZ TABORDA es que se condene al

¹⁴ El término para el demandante corrió entre el 21 y el 27 de abril, mientras que para los demandados corrió entre el 28 de abril y el 4 de mayo de 2021.

¹⁵ Artículo 15 del Decreto 806 de 2020.

reconocimiento de una pensión de invalidez, y habiéndose advertido que éste se había sometido al trámite de calificación definido en nuestro ordenamiento jurídico (artículos 41 a 43 de la Ley 100, artículo 142 del Decreto 19 de 2012, 3 y 14 del DECRETO 2463 DE 2001, 18 de la Ley 1562 de 2012 y 1 del Decreto 1352 de 2013), esta Sala de Decisión encontró que se había incurrido una causal de nulidad, ordenando así la vinculación al proceso de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ como LITIS CONSORTES NECESARIOS por pasiva.

En efecto, es claro que estas entidades emitieron unos dictámenes dentro del trámite de calificación en el **año 2009**, del 3 de febrero y el 21 de octubre respectivamente, y la parte actora ha aportado con la demanda un dictamen que es de fecha posterior, concretamente del **8 de mayo de 2014** proferido por la **IPS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**.

Y se advierte que si bien el Juez de instancia en ejercicio de sus facultades oficiosas decretó en audiencia celebrada el **12 de abril de 2016** como **prueba de oficio** la realización de un dictamen pericial por la **JUNTA REGIONAL DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA**, el que efectivamente fue emitido el **15 de junio de 2016**; lo cierto es que con ocasión de la decisión de nulidad adoptada por esta Sala de Decisión el **10 de julio de 2018**, para el momento en se emita la sentencia que ponga fin a la primera instancia, habrán pasado mucho más de cinco años de la fecha en la que se realizó la última valoración al actor, debiéndose destacar que por la naturaleza de sus padecimientos (**Fribromialgia, trastorno depresivo y trastorno de ansiedad**), se trata de enfermedades que bien pueden evolucionar en el transcurso del tiempo.

En este sentido, resulta pertinente resaltar que el legislador haciendo uso del principio inquisitivo, faculta al juez para decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para encontrar o aproximarse a la realidad histórica de la controversia planteada. Sobre el particular a señalado la Corte Constitucional en sentencias como la **C 1270 de 2000** que, “si la justicia es un elemento fundante del nuevo orden constitucional, valor y principio constitucional que debe ser realizado como fin propio de la organización estatal, constituye un deber y no una mera facultad la posibilidad de que se decreten pruebas de oficio. Naturalmente ello estará determinado por la necesidad de que se alleguen al proceso los elementos de juicio requeridos para que se adopte una decisión ajustada al derecho y a la equidad”.

En la **SU 768 de 2014**, la jurisprudencia constitucional no solo respalda la legitimidad de las pruebas de oficio, sino que incluso sostiene su necesidad, partiendo de la idea de que la búsqueda de la verdad es un imperativo para el juez y un presupuesto para la obtención de decisiones justas. Tal potestad no debe entenderse como una inclinación indebida de la balanza de la justicia para con alguna de las partes, sino como “un compromiso del juez con la verdad, ergo con el derecho sustancial”. En efecto, **el decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, es un verdadero deber legal**. Así, de acuerdo con lo definido por la Alta Corporación, el funcionario debe decretar pruebas oficiosamente: i) cuando a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o **iii) cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia material**; iv) cuidándose, en todo caso, de no promover con ello la negligencia o mala fe de las partes.

Ahora bien, el máximo órgano de la Jurisdicción Ordinaria en su Sala Laboral, mediante sentencias con **Radicado 25672 del 7 de marzo de 2006** y **41024 del 30 de enero de 2013**, ha señalado lo siguiente:

“Llama la atención la Corte a los jueces de instancia, para que **en aquellos procesos en que estén involucrados derechos pensionales, acentúen sus potestades oficiosas en materia probatoria a efectos de que de manera oportuna se superen las deficiencias o precariedades probatorias que adviertan con respecto de puntos que fueron materia de discusión durante el trámite procesal**, pues ciertamente decidir como si fueran meramente árbitros y no directores del proceso, no se corresponde con la **función que hoy en día tienen de administrar justicia, sobre todo en materia que como aquí se discute, el impacto social es significativo**”. (Negrilla de la Sala)

Y en reciente providencia **SL514-2020**, también referida a un caso en el que se discute un derecho pensional, anotó:

“Para la Sala es claro que este último error de facto, no puede conducir a la absolución del demandado, como lo propone la administradora de pensiones, ni mucho menos a emitir decisiones inhibitorias. El modelo procesal acogido por la legislación colombiana, que combina los sistemas de actividad probatoria de corte dispositivo e inquisitivo, le otorga al juez el poder de decretar pruebas de oficio para «verificar los hechos alegados por las partes» (núm. 4º art. 37 C.P.C.), constatar «los hechos relacionados con las alegaciones de las partes» (art. 179 C.P.C.) y, específicamente en el proceso laboral, de ordenar «la práctica de todas aquellas

que a su juicio sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos» (art. 54 del C.P.T. y S.S.) y solicitar «las demás pruebas que considere [el tribunal] necesarias para resolver la apelación o la consulta» (art. 83 del C.P.T. y S.S.).

En el Estado constitucional y democrático de Derecho, donde imperan razones de justicia material (art. 2º y 228 C.P.), las anteriores disposiciones, propias del sistema de actividad probatoria inquisitivo, cobran un especial sentido, pues le imponen al juez el deber de tener iniciativa en la averiguación de la verdad real, para lo cual debe procurar, de oficio, acopiar los elementos de juicio idóneos que le permitan eliminar las dudas fundadas que tenga en torno a los supuestos fácticos del proceso, esclarecer espacios oscuros del pleito y constatar la veracidad de los hechos sometidos a su consideración." (negrilla intencional)

De esta manera, inclusive aunque la parte interesada no hubiere aportado la prueba en la oportunidad o en los términos señalados en nuestro ordenamiento, el Juez debe decretarla de oficio, si considera que es relevante para resolver la Litis, porque las normas procesales son el medio por el cual transita el derecho sustancial, y por ello es que aquellas deben estar en equilibrio con éste para lograr la realización de la justicia, debiéndose resaltar que el exceso o la rigurosidad de los parámetros instrumentales, puede desconocer la justicia material.

No debe olvidarse que el juzgador está obligado a buscar la verdad material del asunto puesto a su conocimiento para un real acceso a la administración de justicia, con fundamento en el **artículo 228** de la Constitución Política. En el mismo sentido, el **artículo 11 del C.G.P.** indica que *"al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial"*, y el **artículo 48 del C.P.T y S.S.**, modificado por el **7º de la Ley 1149 de 2007** expresa: *"el juez asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio de las partes, la agilidad y rapidez en su trámite"*.

Finalmente, ha de indicarse que el **artículo 53 de la Carta Política** consagra el principio fundamental de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales - entre ellos garantía a la seguridad social-, y por ello al versar el objeto de este proceso sobre el reconocimiento de prestaciones de la seguridad social (**pensión de invalidez**) y el cuestionamiento de los dictámenes emitidos por las demandadas en este proceso; si bien el Juez en su momento decretó una prueba de oficio dirigida a la valoración del actor con la historia clínica actualizada hasta ese momento, si en virtud

RADICADO 050013105 010 2014 01674 00

de la tardanza en el trámite ésta **data del año 2016**, debe entonces continuar por la senda ya iniciada dirigida al completo esclarecimiento de los hechos controvertidos y a la averiguación de la verdad real. Y esto implica obtener un dictamen que provenga de una historia laboral actualizada porque la que se tiene es anterior a ese año 2016 y que permita verificar la condición del demandante no sólo para el momento en que se instauró la demanda, pues no puede perderse de vista que, habiéndose radicado en el año 2014, bien se puede presentar una situación sobreviniente por tratarse en este caso, de enfermedades de origen común de naturaleza crónica.

Así, el Juez en su momento decretó como prueba de oficio el remitir al actor la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ** (a una Sala distinta a la que emitió el dictamen cuestionado en este proceso que data del año 2006) , el apoderado del demandante ahora solicita que la valoración la efectúe la **FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**, entidad que como el **CENDES**, es diferente a las codemandadas y a aquella que emitió el dictamen aportado con la demanda (**IPS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**, 8 de mayo de 2014, Folio 25 – 28).

Por ello, queda también bajo la potestad del A quo en virtud de sus facultades oficiosas, **decidir cuál habrá de ser la entidad que realice el experticio actualizado**, prueba de la que no sólo se predica su conducencia y pertinencia, sino la utilidad para constatar la veracidad de los hechos sometidos a su consideración. Finalmente, y habiéndose constatado el efecto de la tardanza en el trámite en relación con la actualidad y vigencia de los dictámenes de calificación de invalidez, se invita y conmina al A quo al ejercicio de sus potestades como Juez Director del Proceso para procurar la agilidad en el trámite y evitar así, que se presente nuevamente la dilación que generó la desuetud del dictamen que oficiosamente había decretado años atrás.

Se revocará así la decisión cuestionada, y al haber salido avante el recurso, no hay lugar a condena en costas en esta instancia.

4. DECISIÓN

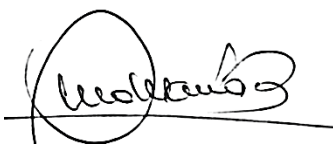
RADICADO 050013105 010 2014 01674 00

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido en la audiencia pública celebrada el pasado ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020), para en su lugar ordenar al Juez Décimo Laboral del Circuito el decreto de la prueba dirigida a efectuar una valoración actualizada de la pérdida de capacidad laboral y fecha de estructuración del señor **MARTÍN ALONSO RUIZ TABORDA**, incluyendo la historia clínica actualizada, conforme los lineamientos definidos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 125 del 19 de julio de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

RADICADO 050013105 010 2014 01674 00



RADICADO: 050013105 010 2014 01674 00

AUTO del 16/07/2021

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia, **para ello debe tener una cuenta de Microsoft.**

Enlace en caso de no tener lector QR: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amzapatap_cendoj_ramajudicial_gov_co/EvN62G8WoVVOqyyCzxMUpikBGoYS8UvumIL3HOLVR6wA?e=NcsGuj